

PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL PROCESO CANÓNICO ORDINARIO*

ZENON GROCHOLEWSKI

SUMARIO

INTRODUCCIÓN: DELIMITACIÓN DEL TEMA. **I • PRINCIPIOS INSPIRADORES FUNDAMENTALES.** 1. Centralidad de la potestad judicial del Papa y del Obispo diocesano. 2. Centralidad del concepto de certeza moral. 3. Preferencia por las soluciones extrajudiciales. **II • OTROS PRINCIPIOS INSPIRADORES DE GRAN IMPORTANCIA.** 1. Sustancial uniformidad de la ley procesal. 2. Ejercicio común de la potestad judicial en las Iglesias particulares. 3. Procedimiento claro, breve, simple y al mismo tiempo seguro. 4. Centralidad del proceso contencioso ordinario. 5. Proceso sustancialmente escrito. 6. Proceso público para las partes y secreto para los demás. • CONCLUSIÓN.

INTRODUCCIÓN: DELIMITACIÓN DEL TEMA

Antes de entrar en materia, quisiera observar que en los *Principia*, aprobados por el Sínodo de Obispos el 7 de octubre de 1967, según los cuales habría debido realizarse la reforma del Código de derecho canónico, se afirmó que existía una fuerte carencia en lo relativo a la justicia administrativa y, por tanto, se auspició una reforma radical en ese ámbito, mientras que sobre el proceso referido a la justicia ordinaria se constató que «los recursos y las apelaciones judiciales parecen suficientemente regulados según las exigencias de la justicia en el Código de derecho canónico [de 1917]»¹. Pero me abstendré de tratar aquí de la justicia administrativa (tanto en sentido amplio, que se desenvuelve en el ámbito de la propia autoridad administrativa, como en sentido estricto, que se realiza ante la autoridad judicial)² —así como prescindiré de tra-

* La versión original italiana de este artículo se publicó en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *I giudizi nella Chiesa. I processi contenzioso e matrimoniale*, Quaderni della Mendola, vol. 6, Milano 1998, pp. 9-33.

1. *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, en «Communications» 1 (1969), 77-85, n. 7.

2. A este respecto, cfr. mi artículo *Treinta años de justicia administrativa canónica. Balance y perspectivas*, en «Fidelium Iura» 8 (1988) 267-306.

tar todos los procedimientos de naturaleza administrativa que se regulan en el Libro VII— y me limitaré al proceso judicial en los tribunales ordinarios. Sólo mencionaré otros procedimientos marginalmente.

Considero oportuno también advertir que no me propongo enunciar simplemente los principios inspiradores de la reforma del proceso ordinario llevada a cabo en 1983, sino los principios inspiradores del actual Libro VII (en cuanto trata del proceso ante los tribunales ordinarios), aunque no sean un resultado patente de la última reforma del Código. Sólo una mirada al proceso canónico con esa perspectiva nos permitirá captar las principales claves de lectura de las normas procesales vigentes.

El tema me ha parecido amplio, y he debido hacer una elección. En consecuencia, no pretendo tratar aquí de todos los principios inspiradores del actual derecho procesal canónico. Sin embargo, no he encontrado una clara línea de separación entre los principios que debía tratar y los que debía omitir en este estudio. Sea de ello lo que fuere, he decidido dejar sin examinar algunos principios inspiradores —aun algunos fundamentales, como la salvaguardia del derecho de defensa y del contradictorio, la búsqueda de la verdad objetiva, las tentativas pastorales, etc.— en la medida en que me han parecido comúnmente conocidos, ya ampliamente tratados en la literatura y en las alocuciones de los Pontífices a la Rota Romana y/o afirmados también en el derecho civil (aunque acentuados en el canónico). Y he escogido algunos otros que, por una u otra razón, me han parecido dignos de ser puestos de relieve.

Dividiré la exposición en dos partes. En la primera indicaré tres principios inspiradores del Libro VII del Código que me parece que se encuentran entre los *fundamentales*. En la segunda parte, en cambio, trataré de algunos otros principios inspiradores de ese libro que aparecen, en todo caso, como *de gran importancia*.

I. PRINCIPIOS INSPIRADORES FUNDAMENTALES

El primero de estos principios fundamentales que examinaré se refiere a las *estructuras judiciales* de la Iglesia, el segundo a la *dinámica procesal*, y el tercero al *recurso al procedimiento judicial*.

De todos modos, estos principios caracterizaban también al derecho procesal del Código anterior y pueden deducirse fácilmente del mismo Libro VII.

1. *Centralidad de la potestad judicial del Papa y del Obispo diocesano*

En primer lugar es preciso subrayar que las estructuras judiciales de la Iglesia están claramente determinadas por la doctrina teológica acerca de la *potestas sacra*, y específicamente acerca de la potestad judicial.

De modo acorde con esa doctrina, todas las estructuras judiciales de la Iglesia se fundan sobre el hecho de que el juez, en el nivel de la Iglesia universal, es el Romano Pontífice (cfr. c. 1442); y en el nivel de la Iglesia particular es el Obispo diocesano (cfr. c. 1419). Estos dos sujetos son los puntos de apoyo de todas las estructuras judiciales. Cada uno de ellos, por ley divina, es juez por el solo hecho de estar investido del respectivo oficio.

Tanto el Romano Pontífice en el nivel de la Iglesia universal, como el Obispo diocesano en el ámbito de su propia diócesis, pueden juzgar de los tres modos siguientes: a) personalmente (cfr. cc. 1442 y 1419 § 1); b) a través de su propio tribunal ordinario (cfr. cc. 1442 y 1419-1420), que en todo caso ejerce de manera vicaria la potestad del Romano Pontífice o del Obispo diocesano, respectivamente (el Código habla, acertadamente de «tribunal Episcopi», «tribunal Metropolitae»: cfr. c. 1438, 1); o bien c) por medio de un tribunal o juez delegado (cfr. cc. 1442 y 1419 § 1)³.

3. Aunque algunos autores, basándose en el c. 135 § 3, sostienen distinta opinión (cfr., por ejemplo, J. I. ARRIETA, *ad c. 135*, en *Código de Derecho Canónico*, ed. anotada, Pamplona ⁵1992; P. V. PINTO, en *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, 82; H. PREE, en *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, 136; K. LÜDICKE, en *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen seit 1985, Loseblattwerk, Stand: 22. November 1993, Einführung vor 1419, 3, 11; 1419, 7; 1442, 5), el c. 135 § 3, en cuanto habla de la imposibilidad de delegar la potestad judicial, no se refiere a la persona del Obispo diocesano (cfr. F. J. URRUTIA, *De normis generalibus*, Romae 1983, 93; M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma ³1996, 129; P. A. BONNET, *I tribunali nella loro diversità di grado e di specie*, en AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico* [Studi Giuridici, 29], Città del Vaticano ²1994, 187).

Así pues —prescindiendo de los tribunales religiosos, que en el Código y en la realidad eclesial constituyen una cuestión casi marginal y, por tanto, no considero necesario detenerme aquí sobre ella⁴—, todas las estructuras judiciales de la Iglesia tienen su origen o en el Romano Pontífice o en el Obispo diocesano (y, obviamente, en los equiparados a este último: cfr. c. 381 § 2)⁵, y están condicionadas por ellos.

También el poder del Romano Pontífice de avocar a sí cualquier causa (c. 1417) y la exclusión de algunas causas de la competencia del Obispo (cfr. c. 1419 § 1) son reflejo de las normas generales (que son de naturaleza teológica) sobre las relaciones entre la potestad del Papa (cfr. c. 331) y la de los Obispos (cfr. c. 381 § 1).

Cuanto llevo dicho pone de relieve una gran responsabilidad personal del Papa, y quizá especialmente del Obispo diocesano, en cuanto a la recta administración de la justicia⁶; responsabilidad, quizá, no siempre suficientemente sentida.

4. Vide, al respecto, mi comentario al c. 1442, en AA.VV., *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1997, IV/1, 803-805.

5. Más ampliamente respecto al Romano Pontífice, cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa*, en «Ius Ecclesiae» 7 (1995) 39-64; en cambio, respecto al Obispo diocesano, cfr. ID., comentario al c. 1419, en AA.VV., *Comentario Exegético...*, IV/1, 766-769.

6. En otro lugar he precisado: «Aunque el Obispo diocesano ejerza —como sucede ordinariamente— la potestad judicial por medio de su tribunal, le están reservados personalmente por ley los siguientes actos: nombrar al Vicario judicial (c. 1420 § 1), a los Vicarios judiciales adjuntos (c. 1420 § 3), a otros jueces diocesanos (c. 1421 § 1), al promotor de justicia y al defensor del vínculo (c. 1435), así como a los demás que componen el tribunal (c. 470); remover a esas personas (vide comentario a los cc. 1422 y 1436 § 2); sancionar a los jueces a tenor del c. 1457 § 1 (cfr. cc. 1341 y 1717 ss.); confirmar o no en su oficio al Vicario judicial y a los Vicarios judiciales adjuntos después de tomar posesión de la diócesis (c. 1420 § 5); aprobar a los abogados que desean ejercer en su foro (c. 1483) y excluirlos del elenco (c. 1488); aprobar a las personas que han de ejercer la función de auditores (c. 1428 §§ 1-2); reservarse algunas causas (c. 1420 § 2); encomendar causas más difíciles o de mayor importancia a un número mayor de jueces (c. 1425 § 2); asignar una causa a los jueces sin seguir el turno previsto (c. 1425 § 3); si lo permite la Conferencia episcopal, confiar a un juez único las causas reservadas al colegio de tres jueces (c. 1425 § 4); decidir la cuestión de recusación del Vicario judicial (c. 1449 § 2); permitir que un juez de otra diócesis recoja pruebas en el territorio de su jurisdicción (c. 1469 § 2); ser informado de que va a juzgar en su territorio un juez que ha sido expulsado por la fuerza de su circunscripción o que ha sido impedido para ejercitar en ella su jurisdicción (c. 1469 § 1); establecer normas sobre las tarifas que han de aplicarse en su tribunal (c. 1649 § 1); a no ser que la ley particular establezca otra cosa, mandar ejecutar la sentencia, personalmente o por medio de otros (c. 1653 § 1); por lo que se refiere al proceso penal: realizar personalmente o designar a una persona para que realice la investigación previa (c. 1717 § 1), decidir posteriormente si ha de procederse

2. Centralidad del concepto de certeza moral

Por lo que se refiere a toda la dinámica procesal, y de modo especial a la fase probatoria y discusoria, un principio primario inspirador de las normas del Libro VII es, sin duda, la exigencia, establecida explícitamente en el CIC 17 (c. 1869) y confirmada en el c. 1608 del actual Código, de alcanzar la certeza moral para poder pronunciar una sentencia favorable al actor.

El concepto de certeza moral —como sabemos— fue delineado de manera verdaderamente magistral por Pío XII sobre todo en la alocución a la Rota Romana de 1942⁷, aunque fue tratado también en alguna otra alocución⁸, y confirmado con fuerza por Juan Pablo II en la alocución a la Rota Romana de 1980⁹. Aun tratándose de discursos anteriores al Código actual, poseen plena validez. En efecto, el mencionado c. 1608 reproduce (salvo alguna diferencia en la formulación literaria) la dispo-

y de qué modo (c. 1718), encargar al promotor de justicia que presente el escrito acusatorio (c. 1721 § 1), tomar las oportunas precauciones durante el proceso penal (c. 1722), mandar o permitir que el promotor de justicia renuncie a la instancia (c. 1724 § 1) (...) En todo caso, la responsabilidad del Obispo diocesano hacia su propio tribunal no se agota en estos actos, sino que es de carácter general: a él corresponde dirigir el tribunal («tribunal moderari»: c. 1649 § 1; «tribunali praeesse»: cc. 1449 § 2, 1488 § 1). En otras palabras, es responsable, con su potestad administrativa relativa al tribunal, de la recta administración de justicia en la diócesis (preparación del personal, observancia de la ley por parte del tribunal, etc.). El Obispo diocesano es llamado, sobre todo constantemente por la Signatura Apostólica, *moderador* (*moderator*) del tribunal, y ese tribunal apostólico, al que entre otras cosas se ha confiado la vigilancia sobre la recta administración de justicia en la Iglesia (PB, 124,1^o [...]), se dirige frecuentemente de manera directa al Obispo, a propósito de los problemas concretos de los tribunales. Sólo al Obispo diocesano corresponde ponerse de acuerdo con otros Obispos para formar un tribunal interdiocesano (c. 1423 § 1). También es el Obispo, de modo particular, quien debe empeñarse para que, quedando a salvo la justicia, en cuanto sea posible se eviten los litigios en el Pueblo de Dios y se resuelvan cuanto antes pacíficamente (c. 1446 § 1)» (AA.VV., *Comentario Exegético...*, IV/1, 768-769).

7. *Alocución a la Rota Romana*, 1.X.1942, en AAS 34 (1942) 338-343. O. GIACCHI habla de una enseñanza «mirabile di chiarezza, valido per il suo contenuto di scienza giuridica, a parte ogni considerazione dell'altissimo seggio spirituale da cui veniva pronunciato» (*La certezza morale nella pronuncia del giudice ecclesiastico*, en AA.VV., *Ius Populi Dei*, Miscellanea in honorem R. Bidagor, II, Roma 1972, 611).

8. *Alocución a la Rota Romana*, 3.X.1943, en AAS 33 (1941) 421-426. Para comprender el iter de formación de la certeza moral en el ánimo del juez considero importante también la *Alocución a la Rota Romana*, de 2.X.1944, en AAS 36 (1944) 281-290. En la *Allocuzione ai partecipanti del VI Convegno nazionale dei Giuristi Cattolici Italiani*, de 5.XII.1954, en AAS 48 (1955) 60-71, Pío XII propuso el concepto de certeza moral también al dictar sentencia en el campo del derecho estatal (*ibid.*, 65).

9. AAS 72 (1980) 172-178, nn. 4-6.

sición del anterior, y por tanto, a tenor del c. 6 § 2, ha de interpretarse «teniendo en cuenta también la tradición canónica».

Se trata de un concepto fundamental en el proceso canónico. E. McCarthy dice, justamente, que es «punto central y síntesis de todo el derecho procesal» canónico¹⁰.

En un reciente estudio, al que remito para ulteriores consideraciones¹¹, he constatado al respecto: «*Por una parte* [...] las normas procesales han sido elaboradas a fin de que, cuando las pretensiones del actor sean justas, el juez pueda alcanzar la certeza moral objetiva acerca de ellas. El momento crucial del proceso es, precisamente, aquel en que el juez debe decidir si hay o no certeza moral. Todo el resto está ordenado a preparar adecuadamente ese momento. Esto resulta patente, por ejemplo, cuando la ley vela por que participe en el proceso la parte convenida ejerciendo sus derechos; exige ciertas cualidades al juez; prescribe la participación de algunas personas (promotor de justicia, defensor del vínculo, notario, abogados) y requiere también en ellas las apropiadas cualidades; determina el modo de reunir las pruebas (con el afán de que sean seguras) y establece ciertas normas sobre su valor; se preocupa de que cuantos participan en el proceso puedan examinar las actas; impone una adecuada discusión entre ellos; especifica los modos de impugnar las decisiones. Ésa es también, en cierto modo, la orientación de todas las demás normas procesales, excluyendo quizá solamente las que miran a evitar las controversias judiciales buscando una solución pacífica de los conflictos, o a poner fin a la instancia sin que se dicte sentencia.

Si esto es verdad, como lo es en efecto, el concepto de certeza moral aparece, *por otra parte*, también como una importante y apropiada clave de lectura y de interpretación de las normas procesales: éstas deben interpretarse de modo que realmente sirvan para asegurar la búsqueda de la verdad objetiva, o sea, para conseguir la certeza moral auténtica, esto es objetivamente fundada»¹².

10. «Punctum centrale ac synthesis totius iuris processualis est certitudo moralis quam iudex assequi debet» (*De certitudine morali quae in iudicis animo ad sententiae pronuntiationem requiritur*, Romae 1948, 3).

11. *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, en «In charitate iustitia» 5 (1997) 41-77; *Idem*, en TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE, *Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 1997*, Torino 1997, 25-48; *Idem* (texto corregido), en «Ius Ecclesiae» 9 (1997), 417-450; *Idem*, en inglés, en «Forum» 8 (1997) 1, 45-80; en alemán en «De processibus matrimonialibus» 4 (1997) 11-44; en polaco en «Jus matrimoniale» 3 (1998), 9-43.

12. *Ibidem: osservazioni conclusive*, 2.

En consecuencia, en el derecho procesal canónico no se puede prescindir del estudio, y por tanto de la recta comprensión, de ese concepto fundamental.

3. *Preferencia por las soluciones extrajudiciales*

La legislación canónica demuestra preferencia por buscar soluciones extrajudiciales a los conflictos¹³, en lugar de recurrir al proceso judicial. Esto se expresa muchas veces en el Código.

a) Por lo que se refiere a los procesos contenciosos, es fundamental en esta materia el c. 1446, que —a diferencia del correspondiente canon del CIC 17 (c. 1925)— sale fuera de los estrechos confines del derecho procesal y subraya la obligación *de todos los fieles* de procurar con diligencia que, «sin perjuicio de la justicia, se eviten en lo posible los litigios en el pueblo de Dios y se arreglen pacíficamente cuanto antes» (§ 1).

Esta obligación, según el mismo canon, se hace particularmente vinculante para los Obispos [diocesanos] (§ 1), evidentemente, no sólo por su especial responsabilidad en materia judicial, sino también por razón de su oficio pastoral en general.

La obligación de la que hablamos se extiende también *al juez* —y aquí entramos claramente en el campo propio del derecho procesal— «al comenzar el litigio, y en cualquier otro momento, siempre que abrigue alguna esperanza de éxito» (§ 2).

Además de indicar los sujetos de esa obligación, el c. 1446 prevé también una amplia gama de posibles intervenciones en esta dirección (aquí limitadas sólo al juez, puesto que estamos en el campo del derecho procesal), como: exhortación, ayuda para buscar de común acuerdo una solución equitativa de la controversia, indicación de los medios idóneos para ello, un eventual recurso a la mediación (§ 2 y también § 3).

Además, en los cc. 1713-1716, el CIC establece las normas sobre dos medios específicos de evitar los litigios judiciales, la transacción y el

13. Seguiré principalmente mi artículo *La tutela dei diritti dei fedeli e le composizioni stragiudiziali delle controversie*, en «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 8 (1995) 273-286. A él me remito para ulteriores consideraciones.

juicio arbitral, que pueden emplearse en las controversias que versan sobre el bien privado del que las partes pueden disponer.

Esta normativa de carácter general, encuentra resonancia después en otros cánones, que se refieren específicamente: al proceso contencioso oral (c. 1659 § 1), al proceso contencioso especial de nulidad de matrimonio (c. 1676), al proceso contencioso especial de separación conyugal (c. 1695), y al proceso penal (cc. 1341, 1718).

Me parece oportuno mencionar que dicha normativa tiene una fuerte resonancia también en lo que se refiere al proceso contencioso-administrativo (cc. 1733-1734).

b) No es difícil adivinar el porqué de esa preferencia por las soluciones extrajudiciales y de una cierta desconfianza hacia las soluciones judiciales. Así lo pide la naturaleza de la Iglesia, que requiere que «los conflictos (...) se resuelvan con espíritu de caridad, de amor, de sincero perdón y de verdadera conciliación, no contentándose tampoco con un mero compromiso. Y esto se puede conseguir más fácilmente con las soluciones pacíficas que con un verdadero proceso»¹⁴. En otras palabras, «en la Iglesia, no se trata simplemente de que venza quien tiene razón, sino que se trata: de devolver la salud a la *communio* herida (...); de restaurar y hacer eficaz la debida colaboración entre los miembros del Cuerpo Místico de Cristo (...); de hacer valer los bienes espirituales, que tienen particular importancia a la luz de la fe. Todo esto se puede alcanzar con mayores posibilidades de éxito en las soluciones extrajudiciales»¹⁵.

Estas finalidades que se traslucen en la preferencia por las soluciones extrajudiciales —y esto querría subrayarlo fuertemente— postulan claramente su búsqueda también en la misma actividad judicial¹⁶.

c) En cualquier caso, respecto a las soluciones extrajudiciales, es preciso advertir que los cc. 1446 § 3 y 1715 § 1 distinguen entre las causas de bien público (y otras sobre materias de las que las partes no pueden disponer libremente) y las causas de bien privado. En efecto, es obvio que en las causas de bien público no pueden utilizarse todos los

14. *Ibid.*, 282.

15. *Ibid.*, 282-283.

16. *Cfr. ibid.*, 286.

tipos de soluciones extrajudiciales. Así, por ejemplo, ante la cuestión de nulidad de un matrimonio se puede eventualmente convalidar el matrimonio y restablecer la convivencia o, atendiendo a la importancia de la cuestión, examinar judicialmente si se da o no esa nulidad (cfr. cc. 1676 y 1674 n. 2). De modo semejante, en un caso de graves delitos, si el delincuente no quisiera cambiar de actitud, para evitar daños espirituales podría ser necesario incoar el proceso judicial (cfr. cc. 1341, 1342 § 2, 1718 § 1).

II. OTROS PRINCIPIOS INSPIRADORES DE GRAN IMPORTANCIA

Los principios que me propongo presentar ahora se diferencian de los precedentes también por el hecho de que han sido específicamente tenidos en cuenta por la Pontificia Comisión al elaborar el Libro VII del actual Código de Derecho Canónico.

1. *Sustancial uniformidad de la ley procesal*

La estructura de la potestad en la Iglesia, y sobre todo el poder del Romano Pontífice en materia judicial, ha hecho poco aplicable el principio de subsidiariedad en el derecho procesal canónico.

Efectivamente, en los mencionados *Principia*, al mismo tiempo que se manifestaba el deseo de una mayor aplicación del principio de subsidiariedad, se advertía: «Por lo que se refiere al derecho procesal, existen serias dudas sobre la oportunidad de admitir la llamada descentralización en esa materia con mayor amplitud que en la disciplina actual». A este propósito se recordó que «en virtud del primado del Romano Pontífice, se reconoce a todo fiel, en todo el orbe católico, la facultad de deferir su causa a la Sede Apostólica en cualquier grado del juicio o en cualquier momento del litigio»¹⁷; y se constató: «es bien sabido que, para la admi-

17. Este principio, que el CIC 17 recogía en el c. 1569 § 1 y el actual en el c. 1417, no está formulado del todo correctamente: cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Diritto dei fedeli di deferire e di introdurre le cause presso la Santa Sede*, en *I diritti fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società* (Actas del IV Congreso Internacional de Derecho Canónico: Fribourg 6-11.X.1980), Fribourg Suisse-Freiburg i.Br.-Milano 1981, 599-567; más brevemente en ID., *comentario al c. 1417*, en AA.VV., *Comentario Exegético...*, IV/1, 760-762.

nistración de justicia, es necesario respetar en los diversos grados una cierta organización unitaria; de lo contrario se daría ocasión o pábulo a la falta de certeza en los juicios, o a engaños y otros inconvenientes verdaderamente numerosos, o a que fueran deferidos a la Sede apostólica».

Pero, por otra parte, los *Principia* advirtieron también la conveniencia de dejar a las autoridades locales la redacción de algunas normas secundarias y «la adaptación de las leyes del Código a la índole y al estilo de las leyes vigentes en cada lugar»¹⁸.

Encontramos los mismos principios tanto en los *Praenotanda* al «Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus», enviado en noviembre de 1976 por la Pontificia Comisión para la Revisión del Código a los órganos de consulta¹⁹, como en las anteriores relaciones de la misma Comisión, de 1970²⁰ y de 1974²¹.

En realidad, el Libro VII del Código concede poco a la legislación local. Permite que la ley particular disponga en sentido distinto a lo previsto en el Código solamente en cuanto a: las personas que han de admitirse en el aula del tribunal durante el tratamiento de la causa (c. 1470 § 1); los términos para la caducidad de la instancia (c. 1520); el modo como las partes, el promotor de justicia, el defensor del vínculo, o los abogados pueden hacer las preguntas durante el interrogatorio de las partes o de los testigos (c. 1561 en relación con el c. 1534); la autoridad que debe ejecutar la sentencia (c. 1653 § 1); el tratamiento de las causas sobre los efectos meramente civiles del matrimonio (c. 1672). Además remite a la ley particular la determinación del modo absolutamente seguro para notificar citaciones, decretos, sentencias y otros actos judicia-

18. *Principia...*, n. 5. Cfr. también Z. VARALTA, *De principio subsidiariorum relate ad ordinandam administrationem iustitiae in Ecclesia*, en *Acta Conventus Internationalis Canonistarum Romae diebus 20-25 maii 1968 celebrati*, Typis Polyglottis Vaticanis 1970, 334-355.

19. «Insuper negari nequit quod mores alicuius nationis, leges civiles loci influxum exercent praesertim circa modum et qualificationem mediorum probationis et actuum iudicialium. Ex alia parte, attentis hierarchica structura tribunalium et iure fidelis deferendi semper suam causam ad Sedem Apostolicam, leges processuales in universa Ecclesia debent substantialiter inter se congruere. Commissionis hic fuit labor: iustam invenire aequilibratam inter decentralizationem (quam vocant) et unitariam iustitiae organizationem (...)» («Communicationes» 8 [1976] 184, n. 2). Sobre el juicio al respecto de los órganos de consulta, cfr. «Communicationes» 10 (1978) 210-211.

20. «Communicationes» 2 (1970) 183, n. 7: se trata de un texto casi idéntico al citado en la nota precedente.

21. «Communicationes» 6 (1974) 39.

les (c. 1509 § 1); y confía al Obispo, a quien corresponde la dirección del tribunal, el establecimiento de las normas sobre las cuestiones financieras de las causas (cc. 1649 § 1 y 1580); y asimismo menciona el reglamento del tribunal, en el cual, entre otras cosas, deberían incluirse normas sobre «la extensión de las defensas, el número de ejemplares [de las defensas que deben entregarse] y otras circunstancias semejantes» (c. 1602 § 3). Prevé también la posibilidad de que la Conferencia episcopal establezca normas sobre la transacción, el compromiso y el arbitraje, pero esas normas no serían las únicas que se aplicaran (c. 1714).

No es difícil darse cuenta de que se trata de normas que no afectan a la estructura judicial de la Iglesia, ni a los principios generales o sustanciales del proceso canónico.

A esta observación sobre la muy limitada aplicación del principio de subsidiariedad, es preciso añadir que el c. 87, al otorgar a los Obispos diocesanos amplias facultades de dispensa de las leyes, incluso universales, excluye, sin embargo, esa posibilidad respecto a las leyes procesales.

2. *Ejercicio común de la potestad judicial en las Iglesias particulares*

Quedando firme el principio teológico de que el juez en la Iglesia particular es el Obispo diocesano (c. 1419 § 1), el Código actual ha acogido la idea —ya experimentada desde hacía algún tiempo en algunas naciones y prevista para toda la Iglesia en la Const. Ap. *Regimini Ecclesiae universae* de 1967²²— de un ejercicio común de la potestad judicial

22. Los primeros tribunales interdiocesanos fueron erigidos en Italia por el Santo Padre (MP *Qua cura* de 8.XII.1938, en AAS 30 [1938] 410-413), los sucesivos por la Congregación para la disciplina de los Sacramentos (en Filipinas, Canadá, Argentina, Brasil, Argelia, algunas regiones pastorales de Francia, Colombia, Chile). Una vez traspasada, con la *Regimini Ecclesiae universae* (art. 105, en AAS 59 [1967] 921), esa competencia a la Signatura Apostólica, ésta emitió en 1970 las *Normae pro Tribunalibus interdiocesanis, vel regionalibus aut interregionalibus* (AAS 63 [1971] 486-492), en las que —atendiendo a la doctrina del Concilio Vaticano II sobre la potestad de los Obispos (cfr. especialmente LG, 27)— se establece como principio que son los Obispos interesados quienes erigen los tribunales interdiocesanos (a. 2 § 1), norma que ha sido acogida en el Código. Sobre el origen de los tribunales interdiocesanos cfr. C. ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, en AA.VV., *Dilexit iustitiam* (Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani), Città del Vaticano 1984, 119-138.

por parte de varios Obispos diocesanos, que pueden erigir, en lugar de los tribunales diocesanos, o sea, en lugar de los tribunales de cada uno de los Obispos diocesanos, un único tribunal común, en cuyo caso «el grupo de Obispos o el designado por ellos, tienen todas las potestades que corresponden al Obispo diocesano sobre su tribunal» (cc. 1423 y 1439).

Así, junto a la debida colaboración entre los tribunales (c. 1418) —prevista ya en el c. 1570 § 2 del CIC 17—, el Código vigente²³ prevé también un ejercicio común de la potestad judicial, que ha tenido una amplia aplicación.

3. *Procedimiento claro, breve, simple y al mismo tiempo seguro*

La Pontificia Comisión para la revisión del Código de derecho canónico se propuso claramente elaborar un procedimiento claro, breve, simple, que al mismo tiempo garantice una segura defensa del bien público y del bien privado²⁴.

a) Por lo que se refiere en especial a la simplificación del procedimiento, en realidad las partes del Libro VII son más breves que las partes respectivas del Código anterior, sobre todo las más importantes. Así: la parte «De iudiciis in genere» comprende 101 cánones (1400-1500), mientras que esa materia en el CIC 17 ocupaba 154 (1552-1705). También en la parte que se refiere al juicio contencioso ordinario el número de cánones —155 (1501-1655)— es notablemente menor que en la parte correspondiente del Código anterior, que contenía 219 (1706-1924). Hay también menos cánones relativos a los procesos especiales: del proceso especial de

23. Por eso la Pontificia Comisión hizo notar que, gracias a la norma sobre los tribunales interdiocesanos, «extenduntur ubique, et quoad omnia negotia iudiciaria, indubia beneficia quae, hisce novissimis decenniis, ex regionalibus foris nonnullis nationibus proveniunt» («Communicationes» 2 [1970] 184; 8 [1976] 186).

24. En los *Praenotanda* al «Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus», enviado en noviembre de 1976 por la Pontificia Comisión para la Revisión del Código a los órganos de consulta, se lee: «Ius processuale, ut optatis omnium respondeat, hoc praestare debet, quod nempe iustitia tuto et celeriter administretur, quod unusquisque de populo Dei fidere possit tuitioni suorum iurium per procedurale systema citatum et perspicuum (...) Commissionis hic fuit labor: iustam invenire aequilibratam (...) inter agilem, brevem processus typum et securam publici privatique boni tuitionem» («Communicationes» 8 [1976] 184, n. 2; sobre la reacción de los órganos de consulta cfr. *ibid.*, 10 [1978] 210-211). Lo mismo se lee en las relaciones de la misma Comisión de 1970 («Communicationes» 2 [1970] 183, n. 7) y de 1974 («Communicationes» 6 [1974] 39).

nulidad de matrimonio tratan en el nuevo Código 21 cánones (1671-1691), frente a los 33 precedentes (1960-1992); al proceso penal se dedican en el nuevo Código sólo 15 cánones (1717-1731), mientras que en el anterior se le dedicaban 27 (1933-1959); el título sobre los medios para evitar el juicio tiene actualmente sólo 4 cánones (1713-1716), y en el Código de 1917 tenía 8 (1925-1932); respecto a las causas para la declaración de nulidad de la sagrada ordenación, en el Código vigente se encuentran 5 cánones (1708-1712), cuando en el anterior se encontraban 6 (1993-1998).

Evidentemente, la simplificación no resulta sólo del número de cánones, sino principalmente del hecho de que se han simplificado, precisado y aclarado muchas normas (por más que no se hayan conseguido evitar algunos puntos inciertos), haciendo más ágil la defensa de los derechos y el modo de proceder²⁵.

Así, se ha reducido a la mitad el tiempo disponible para finalizar una causa (según el c. 1453 una causa en primera instancia no debería prolongarse más de un año, y en segunda instancia más de seis meses; en el Código anterior, el c. 1620 establecía la duración de dos años y uno, respectivamente). Se ha abreviado también el plazo para la caducidad de la instancia cuando las partes no realizan ningún acto procesal (el c. 1520 establece un plazo de seis meses; el c. 1736 del CIC 17 establecía dos años en primera instancia y uno en segunda). En las causas de nulidad matrimonial se ha introducido la posibilidad de un procedimiento breve después de una sentencia afirmativa en primera instancia (c. 1628).

Con todo, considero sinceramente que el derecho procesal canónico es verdaderamente simple. Esto resulta patente si se compara con las legislaciones estatales sobre la materia.

Las afirmaciones contrarias, pronunciadas a veces, sobre la complejidad del derecho procesal canónico demuestran poco conocimiento de la problemática. En efecto, ha de tenerse presente que asegurar una adecuada defensa de los derechos no es cosa fácil; es una cuestión de suyo muy compleja que requiere tomar en consideración elementos de diversa naturaleza. Por lo que se refiere al derecho canónico, hay que tener espe-

25. A este respecto remito a mi artículo *Panoramica delle novità del nuovo diritto processuale canonico*, en Z. GROCHOLEWSKI-M. POMPEDDA-C. ZAGGIA, *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova 1984, 167-201; 187-197.

cialmente en cuenta que en la Iglesia se trata principalmente de los procesos de nulidad matrimonial, y la actividad judicial exige también un conocimiento profundo de problemas de derecho matrimonial canónico, hoy en día más complejos que nunca (al menos en la literatura y en la jurisprudencia), así como una concepción genuina de la actividad pastoral en la que se inserta la actividad de los tribunales.

Es completamente absurdo sostener que sea posible elaborar un derecho procesal tan simple que se pueda aprender en poco tiempo; y que ese derecho sea capaz de asegurar una eficaz administración de justicia en la Iglesia.

Si la administración de justicia en la Iglesia no funciona correctamente, el motivo no es, por cierto, la complejidad de las normas procesales, sino principalmente la deficiente preparación del personal —quiero decir la falta de preparación en derecho procesal, o/y en el derecho sustantivo del que se trata en los procesos, o/y en la genuina comprensión teológica de la actividad pastoral— y, a veces, la falta de las estructuras necesarias.

Limitándome al derecho procesal, he señalado en otro lugar: «El modo simplificado de proceder requiere precisamente una mejor preparación de los administradores de justicia, es decir, un mejor conocimiento de los principios fundamentales que están en la base del proceso canónico, un conocimiento más profundo del espíritu de las normas canónicas, la capacidad de interpretarlas a la luz de la tradición y del contexto. De otro modo, se corre el riesgo de un formalismo jurídico inaceptable en derecho canónico, de extravagantes innovaciones interpretativas y de la consiguiente desnaturalización de la actividad de los tribunales, con un perjuicio pastoral inevitable»²⁶.

Considerando la administración de justicia en toda la Iglesia, lo que parece urgente es precisamente la mejor preparación de los operadores de la justicia²⁷.

26. *Cause matrimoniali e «modus agendi» dei tribunali*, en AA.VV., *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati, Città del Vaticano 1994, 964; *idem* en «Ephemerides Iuris Canonici» 49 (1993) 148.

27. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Cause matrimoniali...*, 950-964 (en «Ephemerides Iuris Canonici» 134-150); ID., *Pregi e difetti nell'attuale amministrazione della giustizia nella Chiesa*, en AA.VV., *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna* (Studi Giuridici, 45), Città del Vaticano 1997, 167-175.

b) En todo caso, la simplificación que venimos considerando apuntaba a hacer más expedito el tratamiento de las causas, y no a hacerlo menos serio.

Que se ha querido más bien intensificar la seriedad y la seguridad de juicio lo demuestran, entre otras cosas, los cánones que —a diferencia del derecho anterior (cc. 1573 § 4, 1574 § 1, 1589 §1)— exigen expresamente para el Vicario judicial, para los Vicarios judiciales adjuntos, para los demás jueces y para los defensores del vínculo y promotores de justicia, además de otras cualidades, el doctorado o al menos la licenciatura en derecho canónico (cc. 1420 § 4, 1421 § 3, 1435)²⁸.

La intención de proveer a una mayor tutela de los derechos y a una mayor seriedad de la actividad judicial puede entreverse expresamente también en algunas otras novedades del actual Código; por ejemplo, en la omisión del procedimiento «ex informata conscientia» (cc. 2186-2194, CIC 17); en la desaparición de la norma según la cual las sentencias de la Signatura Apostólica podían no expresar los motivos (c. 1605 § 1, CIC 17)²⁹; en la precisión de que el tutor y el administrador de una persona jurídica no pueden renunciar a la instancia sin el consejo o el consentimiento previsto para los actos que exceden de la administración ordinaria (c. 1524 § 2); en la introducción de normas sobre algunas causas que ni siquiera se mencionaban en el CIC 17, esto es, las de separación conyugal (cc. 1692-1696), las de muerte presunta del cónyuge (c. 1707), y las de dispensa de matrimonio rato y no consumado (cc. 1697-1706), aunque en estos últimos casos no se trate de una novedad absoluta, puesto que esas causas ya venían siendo conocidas por los tribunales o por las autoridades administrativas y estaban reguladas en gran parte por otras disposiciones legales.

28. A las propuestas de decir «...doctores vel licenciati vel saltem in eadem disciplina sufficienter periti» o «saltem vere periti», o «ceteroquin periti», «quia difficillime omnibus in regionibus doctores vel licenciati numero sufficientes inveniuntur», la Pontificia Comisión respondió: «Non admittitur. Dignitas et ipsa efficacia officii iudicandi postulant quod iudex ius canonicum bene calleat ideoque quod seriis studiis iuridicis operam det. Secus gressus ex “vere” peritus ad imperitum facillime datur. Si tamen absolute impossibile sit licenciatis invenire, recurratur ad Signaturam Apostolicam» («Communicationes» 15 [1984] 55).

29. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La Segnatura Apostolica nell'attuale fase di evoluzione*, en AA.VV., *Dilexit iustitiam*, Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, curantibus Z. Grochowski et V. Cárcel Ortí, Città del Vaticano 1984, 218-219.

Pero es principalmente el análisis de las mismas normas procesales el que revela la voluntad expresada en ellas de que los derechos de los fieles y el bien público sean tutelados con la debida seriedad. Obviamente —repito— a ello contribuyen no sólo las normas procesales, sino también la preparación y la seriedad de los mismos operadores de la justicia.

4. *Centralidad del proceso contencioso ordinario*

a) En el Libro VII, junto al proceso contencioso ordinario (cc. 1501-1655), se encuentran el proceso contencioso oral (cc. 1656-1670), diversos procesos especiales (cc. 1671-1716) y, finalmente, el proceso penal (cc. 1717-1731).

Mientras que el proceso contencioso ordinario está bien elaborado en 155 cánones, la normativa sobre todos los demás procesos se contiene en sólo 76 cánones, muchos de los cuales, por otra parte, no se refieren al procedimiento judicial.

El proceso contencioso ordinario no sólo aparece como el más elaborado, sino también como central en la ordenación sistemática del Libro VII, en la medida en que las normas que lo regulan se aplican ampliamente también en los demás procesos mencionados, es decir, en el proceso contencioso oral (cfr. c. 1670), en los diversos procesos especiales —como los de nulidad matrimonial (cfr. c. 1691), separación de cónyuges (cfr. c. 1693), disolución del matrimonio rato y no consumado (cfr. c. 1702), nulidad de la sagrada ordenación (cfr. c. 1710)—, y también en el proceso penal (c. 1728)³⁰, para completar las respectivas normas específicas.

b) Como sabemos, durante la preparación del Código, algunos, partiendo del hecho de que en la Iglesia las causas que se tratan son principalmente matrimoniales, propusieron que —por razones prácticas— se elaborara el proceso matrimonial, en vez del contencioso ordinario, como

30. Y también en las causas de beatificación y canonización (cfr. c. 1403 § 2). Acerca de esas causas cfr. Const. Ap. *Divinus perfectionis magister*, de 25.I.1983, en AAS 75 (1983) 349-355; *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis sanctorum*, de 7.II.1983, *ibid.* 396-403.

proceso principal y típico para los otros procesos. La cuestión se discutió ampliamente entre los consultores³¹. Pero se decidió que el proceso contencioso ordinario quedase como procedimiento básico, principalmente por razones de lógica de la metodología: «Desde el punto de vista científico, primero se debe tratar de lo que es general y después de lo que es especial. El proceso matrimonial, aunque sea usadísimo, no puede ser tomado como género, porque otros procesos, que siempre se dan, aunque sean pocos, no pueden encontrar en él una colocación apropiada»³².

c) E. Corecco —después de haber señalado que el «nuevo CIC, de manera aún más evidente que el CIC de 1917, sitúa el proceso contencioso ordinario como procedimiento base sobre el cual se organizan todos los demás procesos, denominados procesos especiales» (entre los cuales dicho Autor enumera también el penal)— pone objeciones de carácter doctrinal a ese planteamiento: no correspondería a la naturaleza del derecho sustantivo, o sea, al criterio epistemológico de la fe, único que debe seguirse en el derecho canónico, en cuanto que la ley canónica no sería una *ordinatio rationis*, sino una *ordinatio fidei*. Por tanto, según Corecco, el proceso contencioso ordinario, «canónicamente poco apreciable», «en vez de ser el proceso típico y fundamental del ordenamiento canónico, tiene, a pesar de las apariencias, el carácter de proceso especial. Es más, a diferencia de los procesos previstos por el CIC como especiales, éste no posee ni siquiera el carácter de imperatividad, por ser sólo subsidiario. En efecto, se puede recurrir a él sólo cuando no haya sido posible componer los litigios mediante el recurso a la mediación, a la transacción o al compromiso, previstos en los cc. 1713-1715. Que el contencioso ordinario no puede ser considerado (...) como piedra angular de toda la estructura procesal canónica, lo demuestra también el hecho de que es teóricamente pensable que la Iglesia pueda renunciar a la promulgación de un proceso contencioso ordinario propio. Podría

31. Cfr. «Communicationes» 10 (1978) 212-213, y especialmente 11 (1979) 80-81, 15 (1984) 53.

32. «Communicationes» 15 (1984) 53. En otro lugar se lee: «Quinque Consultores sunt omnino contrarii huic propositioni. Ratio est sive quia ipsa prospectiva processualis deformaretur tamquam si in Ecclesia administratio iustitiae ordinaretur pro causis matrimonialibus tantum, sive quia difficultates quae moventur contra actualem systematicam potius manifestant quandam carentiam studii iuris canonici in Ecclesia, sive quia praeoccupati esse debemus de consequentiis quae nova systematica haberet in ordine scientifico, tum in ordine ad praxim processualem tribunalium ecclesiasticorum» («Communicationes» 11 [1979] 81).

optar por canonizar los respectivos procesos civiles estatales, sin renunciar al principio del juez propio (...) El contencioso ordinario canónico (...) no pertenece al núcleo inalienable del proceso canónico. Por el contrario, no es pensable que la Iglesia pueda renunciar a los procesos actualmente definidos por el CIC como procesos especiales, porque pertenecen a la esencia misma del proceso canónico». Entre éstos se cuentan, según Corecco, «por una parte (...) los procesos relativos al *status personarum* (el matrimonial, el de validez de la sagrada ordenación y el penal); por otra, los procesos para la canonización de los santos y para el examen de la doctrina de la fe, no incorporados al CIC. Todos estos procesos, además de ser de hecho también, con mucho, los más frecuentes numéricamente, son los que distinguen inconfundiblemente el proceso canónico del estatal o de cualquier otra forma de proceso»³³.

Aun compartiendo las observaciones sobre la importancia de los procesos denominados *especiales* y sobre su especificidad canónica, me parece que este Autor, al hacer esas objeciones a la actual sistemática, confunde el objeto del tratamiento procesal con el procedimiento. Sus observaciones se refieren a causas diferentes por su objeto. Pero las causas de objeto diverso pueden tratarse también con el mismo procedimiento. Con la actual ordenación metodológica se ha querido responder de manera sencilla y lógica a la pregunta sobre el procedimiento que haya de adoptarse en los diversos géneros de causas. Puesto que se ha querido que las causas llamadas *especiales* (y también las penales) sean tratadas sustancialmente con un procedimiento contencioso, ha parecido lógico y oportuno elaborar primero un procedimiento contencioso, como procedimiento base, válido en principio también para los diversos géneros de causas típicas del derecho canónico.

Por lo demás, así como la teología no puede prescindir del soporte de la filosofía, tampoco una *ordinatio fidei* puede prescindir de un criterio de racionalidad. Además, es de notar que la denominación «procesos especiales» no significa, de suyo, que se trate de los procesos de menor importancia eclesial, sino que puede referirse también precisamente a los procesos específicos del ordenamiento canónico (como, por lo demás, sucede de hecho).

33. E. CORECCO, *La sentenza nell'ordinamento canonico*, en *La sentenza in Europa: metodo, tecnica e stile* (Atti del Convegno internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà, Ferrara 10-12 ottobre 1985), Padova 1988, 268-271.

Respecto al razonamiento de Corecco, querría observar también, marginalmente, lo siguiente: a) No se entiende bien en qué sentido el proceso contencioso ordinario sería, según él, *especial* respecto a los otros: ciertamente, no en el sentido que actualmente posee la relación entre el proceso contencioso y los procesos especiales en cuanto judiciales³⁴. b) Dejando a salvo cuanto he dicho más arriba (I,3 *in fine*), según el sentido delineado por Corecco, no parecen «imperativos» tampoco, por ejemplo, el proceso de nulidad matrimonial o el penal, porque al primero se puede recurrir sólo si no es posible u oportuno proceder a la convalidación del matrimonio (c. 1676), y al segundo sólo si otros medios «no bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo» (c. 1341, cfr. también c. 1718). c) También en las legislaciones estatales están previstas las causas sobre el estado de las personas, como las de nulidad matrimonial o la de separación de cónyuges. d) Hablando en términos absolutos, es pensable que la Iglesia pudiera también canonizar un procedimiento elaborado en el campo de algún ordenamiento estatal para emplearlo en el proceso de nulidad matrimonial en los tribunales eclesiásticos. e) No es pacífico en la doctrina que todas las causas penales puedan ser reducidas a las que versan sobre el estado de las personas.

5. *Proceso sustancialmente escrito*

Como es sabido, hacia el final del siglo XVIII, y sobre todo en el siglo pasado, se observa en el campo del derecho laico en Europa una fuerte reacción doctrinal contra el proceso escrito, que se había afirmado de modo muy constante en los siglos XIII-XVIII, y se revaloriza cada vez más el proceso oral, en el que el juez hace acopio de las pruebas directamente y de manera más concreta. En consecuencia, el sistema oral resultó acogido, más o menos decididamente, en todos los códigos laicos de Europa de nuestro siglo³⁵.

34. La Pontificia Comisión definió los procesos especiales como: «ill[ae] nempe procedur[ae] quae in aliquo deflectunt a typo vel a typis in quibus inscribuntur» («Communications» 8 [1976] 185).

35. Cfr. F. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, in Civitate Vaticana 1956⁴, 467; A. NICORA, *Il principio di oralità nel diritto processuale italiano e nel diritto processuale canonico*, Roma 1977, 3-13, A. DZIEGA, *Kościelny proces ustny* (Proceso orale canonico), Lublin 1992, 20-25.

Aparece también con una fuerte presencia en el Código de Procedimiento Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano de 1946³⁶. También el proceso «coram uno iudice» (cc. 453-767) del m.p. *Sollicitudinem nostram* (es decir, del Código de derecho procesal de las Iglesias orientales) de 1950 estaba inspirado por el principio de oralidad³⁷.

El CIC 17 —aun conteniendo algunos elementos de oralidad— se basaba sustancialmente en el principio de escritura³⁸.

La cuestión estuvo presente en el *iter* de preparación del Código actual³⁹, pero se decidió dejar el procedimiento del proceso canonico construido principalmente sobre el principio de escritura. En efecto, en el proceso contencioso ordinario —que como se ha dicho es central en el derecho procesal canónico— no se han impreso los elementos esen-

36. Cfr. A. NICORA, *Il Principio...*, 546-561; A. DZIEGA, *Koscielny...*, 59-96.

37. Cfr. A. NICORA, *Il Principio...*, 562-570; así como M. CABREROS DE ANTA, *El principio de oralidad y su aplicación en el nuevo proceso oriental*, en «Miscelánea Comillas» 16 (1951) 127-154; J. ŽUŽEK, *Trials before a Single Judge in the Eastern Canon Law*, en «Orientalia Christiana Periodica» 30 (1964) 510-525; A. DZIEGA, *Koscielny...*, 97-133.

38. A. NICORA, *Il Principio...*, 465-544. Este Autor, tras haber analizado todos los elementos de escritura y de oralidad en el proceso contencioso del CIC 17, concluye: «Costretti ad una valutazione globale e perentoria, non ne sapremmo negare il carattere di tipico *processo scritto*. E tuttavia (...) [s]i deve almeno ammettere che esso contiene alcuni “germi” di oralità» (*ibid.*, 544). F. ROBERTI dice: «Codices latinus et orientalis exhibent processum scriptum quibusdam formis oralibus temperatum» (*De processibus*, 469). Cfr. también J. M. PINTO GÓMEZ, *La procedura nel processo contenzioso sommario*, en «Ephemerides Iuris Canonici» 41-42 (1985-1986) 127.

39. Especialmente con referencia a la introducción del «proceso contencioso oral», del que hablaré enseguida. Al respecto cfr. «Communicationes» 4 (1972) 60-65; 8 (1976) 191-193; 11 (1979) 247-255; A. SABATTANI, *Praecipuae innovationes in schemate iuris processualis novi Codicis Iuris Canonici*, en «Kościół i prawo» 3 (1984) 22-23; A. NICORA, *Il Principio...*; Z. GROCHOLEWSKI, *Natura ed oggetto del processo contenzioso sommario*, en «Ephemerides Iuris Canonici» 34 (1978) 114-143; ID., *Ulteriori note circa la natura e l'oggetto del processo contenzioso «sommario», ossia orale*, en «Ephemerides Iuris Canonici» 41-42 (1985-1986) 11-126 (*idem*, en AA.VV., *Cause incidentali e processo contenzioso sommario ossia orale nella dinamica della revisione del diritto processuale canonico*, Roma 1988, 105-120); ID., *Alcune osservazioni sulla procedura del processo sommario proposta dalla Pontificia Commissione*, en «Ephemerides Iuris Canonici» 41-42 (1985-1986) 141-158 (*idem*, en AA.VV., *Cause...*, 135-152); ID., *Illegittimo uso del processo sommario come motivo di nullità della sentenza*, en «Ephemerides Iuris Canonici» 41-42 (1985-1986) 175-181 (*idem*, en AA.VV., *Cause...*, 169-175); J. M. PINTO GÓMEZ, *La procedura nel processo contenzioso sommario*, en «Ephemerides Iuris Canonici» 41-42 (1985-1986) 127-140 (*idem*, en AA.VV., *Cause...*, 121-134); L. MATTIOLI, *Decisione e impugnativa nel processo sommario*, en «Ephemerides Iuris Canonici» 41-42 (1985-1986) 159-173 (*idem* en AA.VV., *Cause...*, 153-167). También respecto al derecho procesal canónico en general la Pontificia Comisión refirió: «Est qui censeat extollendam esse proceduram oralem prae proceduram scriptam» («Communicationes» 10 [1978] 211).

ciales de la oralidad procesal, o sea: la audiencia como momento central de la asunción de las pruebas, de la discusión y de la decisión; la relación inmediata entre el juez, las partes y las fuentes de prueba; la identidad de juez durante la instrucción y en la fase de discusión; la concentración de los actos y su forma oral; etc.⁴⁰. Estos elementos no se encuentran tampoco en las normas específicas sobre las causas matrimoniales.

De todos modos, no se puede negar que se haya acogido más ampliamente que en el pasado el principio de oralidad, tanto en el mismo proceso contencioso ordinario (cfr. sobre todo el c. 1602 § 1, según el cual la discusión oral ante el juez puede bastar para sustituir a las defensas y observaciones escritas)⁴¹, como especialmente con la introducción, junto al proceso contencioso ordinario (cc. 1501-1655), del proceso contencioso oral (cc. 1656-1670), en el que aparecen, «de manera simple y clara, los más típicos elementos de la oralidad procesal»⁴².

Sin embargo, ese proceso tiene, en realidad, escasa relevancia práctica, ya que no puede usarse para tratar las causas de nulidad matrimonial (c. 1690), que constituyen casi toda la actividad de los tribunales eclesiásticos. Debe emplearse el proceso oral para las cuestiones incidentales que se han de resolver por sentencia —también las que se suscitan en las causas de nulidad matrimonial—, pero «salvo que el juez estime otra cosa, teniendo en cuenta la gravedad del asunto» (c. 1590 § 1). Debe emplearse también para las causas judiciales de separación conyugal, pero «si una de las partes o el promotor de justicia no solicitan el proceso contencioso ordinario» (c. 1693 § 1). La misma formulación condicional presenta también la norma general al respecto: «Por el proceso contencioso oral (...) pueden tratarse todas las causas no excluidas por el derecho, salvo que una de las partes pida que se siga el proceso contencioso ordinario» (c. 1656 § 1).

Para valorar el hecho de que el proceso canónico haya permanecido como un proceso principalmente escrito me parece oportuno poner de relieve que:

40. Sobre los elementos esenciales del principio de oralidad, cfr. A. NICORA, *Il Principio...*, 13, 340-360; J. M. PINTO GÓMEZ, *La procedura...*, 128-131; A. DZIEGA, *Koscielny...*, 44-54.

41. Cfr. también A. NICORA, *Il Principio...*, 586-588.

42. A. NICORA, *Il Principio...*, 589; Z. GROCHOLEWSKI, *Natura ed oggetto...*, 125-127; J. M. PINTO GÓMEZ, *La procedura...*, 135-138; A. DZIEGA, *Koscielny...*, 170-179.

— J. M. Pinto Gómez observa acertadamente: «Nadie niega que el proceso oral es el que permite tener una justicia más rápida y más económica. En cambio, se discute mucho si con el proceso oral se obtiene una justicia más segura»; y cita al respecto las palabras de F. Carnelutti: «El *slogan* de la justicia rápida y segura (...) contiene, lamentablemente, una contradicción *in adiecto*: si la justicia es segura no es rápida, si es rápida no es segura». Añade Pinto Gómez: «El beneficio derivado de la oralidad es el mejor conocimiento de la prueba, por el contacto directo, inmediato, personal, con sus fuentes; pero la ventaja de la escritura es la ponderación y seguridad de juicio que ofrece»⁴³.

— Además, se ha hecho notar correctamente que el proceso oral, para dar los frutos deseados, exige de los jueces «agilitatem mentis et alacritatem synthesis»⁴⁴ y, ciertamente no menos, un conocimiento más perfecto del derecho y de la jurisprudencia⁴⁵; que su éxito «depende ante todo del juez, al que se pide rapidez y facilidad de percepción, memoria, capacidad de síntesis, mucha agilidad, mayor preparación y experiencia»⁴⁶. Teniendo en cuenta la deficiente preparación en la actualidad de los operadores de la justicia en la Iglesia, a la que he aludido más arriba, no creo que estemos preparados para afrontar un proceso de ese tipo, especialmente en causas de la importancia de las matrimoniales.

— Cuando se oyen las cifras espantosas de procesos pendientes ante los tribunales estatales de Italia, se entiende la necesidad de emplear, en lo posible, los procedimientos rápidos (que, a la postre, en realidad no son tan rápidos), pero en la Iglesia el número de procesos, ciertamente, no es alto; y tratándose principalmente de causas de gran

43. J. M. PINTO GÓMEZ, *La procedura...*, 139. De modo semejante F. ROBERTI (discípulo y entusiasta de Chiovenda, que era el principal fautor del principio de oralidad en los códigos italianos de procedimiento): «Processus scriptus maiore diligentia conficitur, et magis perpenso iudicio terminatur (...) in eo accuratius evitantur errores; eiusque acta, integra servata, facilius subsequentibus possunt examinibus subici» (*De processibus*, 469). Observa F. DANEELS: «In fact (...) in the canonical trial there is no question of creating a fact by eloquence, but it is for the judge a question of diligent study of and reflection on the acts of the case to ascertain the truth» (*Some Remarks concerning the Concept of Fair Trial according to Canon Law*, en «Forum» 6 [1995] 60). Cfr. también, por ejemplo, A. NICORA, *Il Principio...*, 85-101.

44. «Communicationes» 4 (1972) 65; A. SABATTANI, *Praecipuae innovationes...*, 23.

45. Z. GROCHOLEWSKI, *Natura ed oggetto...*, 143.

46. J. M. PINTO GÓMEZ, *La procedura...*, 139. Cfr. también A. NICORA, *Il Principio...*, 376-381, 622-624.

impronta teológico-pastoral, podemos —pienso— permitirnos el «lujo» de un procedimiento más seguro.

6. *Proceso público para las partes y secreto para los demás*

En los ya varias veces mencionados *Principia* de 1967, según los cuales habría debido llevarse a cabo la reforma del Código, se lee: «Es deseable que se tenga por regla general que todo proceso sea público, a no ser que el juez, por las particulares circunstancias de las cosas y de las personas, en casos bien determinados, considere que se debe proceder en secreto. Y se pide que en el proceso (...) judicial (...) se pongan en conocimiento del recurrente o del reo todos los argumentos que se invocan en su contra»⁴⁷.

Este principio se ha acogido fielmente. Pero ha de observarse que aquí se trata de la publicidad del proceso hacia las partes, y no hacia los demás.

a) El proceso canónico es *público para las partes*. Esta publicidad está estrechamente relacionada con la esencia del proceso, o sea, con el principio del contradictorio y con el derecho de defensa.

Es fundamental en esta materia el c. 1598 § 1, que se refiere a la publicación de las actas: «Una vez recibidas las pruebas, el juez, mediante decreto, debe permitir, bajo pena de nulidad, que las partes y sus abogados examinen en la cancellería del tribunal las actas que aún no conocen; e incluso se puede entregar copia de las actas a los abogados que la pidan; no obstante, en las causas que afectan al bien público, el juez, para evitar peligros gravísimos, puede decretar que algún acto no sea manifestado a nadie, teniendo cuidado de que siempre quede a salvo el derecho de defensa».

Este canon —que, en comparación con el Código anterior (cc. 1858-1859)⁴⁸, por una parte es más decidido al establecer claramente la

47. «Communicationes» 1 (1969) 83, n. 7.

48. Y también en comparación con: art. 120 de las *Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis* de 1934, en AAS 26 (1934) 449-491; art. 175 de la Instr. *Provida Mater* de 1936, en AAS 28 (1936) 313-361.

sanción de nulidad y, por otra, contiene una excepción—, fue objeto de vivas discusiones durante el *iter* de preparación del actual Código⁴⁹ y, en consecuencia, aparece formulado muy ponderadamente.

Es una norma de gran importancia, y probablemente por esto el Santo Padre mismo, en la alocución a la Rota Romana de 1989 —hablando del derecho a la defensa, que «exige de suyo la posibilidad concreta de conocer las pruebas aducidas tanto por la parte contraria como *ex officio*»— advirtió: «Respecto a la posible excepción mencionada, es necesario observar que sería una tergiversación de la norma, a la vez que un grave error de interpretación, si se hiciese de la excepción norma general. Por eso es preciso atenerse fielmente a los límites indicados en el canon»⁵⁰.

Los límites a la excepción de que hablamos son los tres siguientes: a) la excepción se refiere sólo a «algún acto», y no a algunos o a todos los actos; b) el único motivo para no permitir el acceso a algún acto es la necesidad de evitar «gravísimos peligros», y no el deseo «de evitar cualquier peligro vago y genérico u ordinario, o que, en todo caso, no sea gravísimo concreta y actualmente»⁵¹; c) en todo caso, se debe garantizar que quede «siempre íntegro» el derecho a la defensa.

Este tercer límite tiene una gran relevancia, y —teniendo también presente todo el texto de la citada alocución— se presenta como una

49. Cfr. «Communicationes» 16 (1984) 68; PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo: Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis 1991, 469-479. La discusión era necesaria, también porque en las Normas particulares concedidas en 1970 a los Estados Unidos de América se encontraba al respecto una fórmula discutible: «When, after consultation with the advocate and the defender, the judge has decided that all necessary and available evidence has been obtained, the principals will be permitted to read the acts unless, in the opinion of the judge, there is danger of violation of the rights of privacy. The judge will consider the requests by the principals for further instruction before bringing the case to a conclusion» (X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. IV, col. 5812, Norm. 18).

50. AAS 81 (1989) 922-927: n. 6. Cfr. al respecto F. DANEELS, *De iure defensionis. Brevis commentarius ad allocutionem Summi Pontificis diei 26 ianuarii 1989 ad Rotam Romanam*, en «Periodica» 79 (1990) 243-266; 256-258; *idem*, en inglés, en «Studia Canonica» 27 (1993) 77-95; 87-89; y sobre todo, *Id.*, *De tutela iurium subiectivorum: quaestiones quaedam quoad administrationem iustitiae in Ecclesia*, en AA.VV., *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati, Città del Vaticano 1994, 189-192.

51. F. DANEELS, *De iure defensionis...*, 257 (en la versión inglesa, 88).

regla general que ha de observarse siempre: «*ius defensionis semper integrum maneat*». F. Daneels anota, al respecto: «si aquel acto realmente tiene importancia en orden al pronunciamiento de la sentencia y permanece en las actas, parece necesario que pueda conocerlo el patrono —que, si es el caso, ha de nombrarse de oficio— de la parte o de las partes a cuyo conocimiento deba sustraerse por decreto del juez, al menos en la medida en que de hecho dañe su posición procesal. El patrono, como es obvio, en ese caso no puede serlo sólo *pro forma*, sino que debe defender a la parte realmente»⁵².

Pienso que esa excepción, rectamente entendida dentro de sus límites (teniendo presente sobre todo el tercero), no inficiona el principio general de la publicidad del proceso para las partes, sino que incluso, en cierto modo, lo ilumina.

La publicidad del proceso para las partes se refiere también a los motivos de la decisión; esto está conectado asimismo con el derecho a la defensa. Pienso que basta citar a este propósito las palabras de la mencionada alocución de Juan Pablo II que resumen la cuestión: «No puede sorprender que se hable también, en relación con el derecho de defensa, de la necesidad de publicación de la sentencia. En efecto, ¿cómo podría una de las partes defenderse en la apelación contra la sentencia del tribunal inferior, si se viese privada del derecho de conocer su motivación tanto *in iure* como *in facto*? El Código exige, pues, que a la parte dispositiva de la sentencia se antepongan las razones sobre las que se apoya (c.

52. L.c. Cfr. también ID., *De tutela...*, 192; ID., *Some Remarks...*, 76; C. GULLO, *La pubblicazione degli atti e la discussione della causa*, en AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico* («Studi Giuridici», 29), Città del Vaticano 1994, 677-693; 684. Además, F. DANEELS observa, con razón: «Aliquando asseritur ad *ius defensionis partis conventae in causa nullitatis matrimonii tuendum sufficere* —si haec pars contra nullitatem militat— ut defensor *vinculi suum munus exercere possit*, atque, proinde *ius defensionis partis conventae integrum manere*, si defensor *vinculi acta inspicere valeat*. Ad quam obiectionem haec dicenda sunt: si res ita se haberet, erronea esset iurisprudencia rotalis in re, nam Rota Romana pluries nullitatem insanabilem sententiae declaravit ob *ius defensionis parti conventae resistenti denegatum*, quamvis defensor *vinculi in causa intervenerit*; defensor *vinculi utique pro munere suo publico vinculum defendere debet*, atvero id non facit de mandato partis conventae, quae proprio iure defensionis gaudet, quo privari nequit; defensio *vinculi*, si et quatenus pars conventa exercitio iuris defensionis renuntiavit, utique a solo defensore *vinculi exercetur*, quo casu adhuc habetur aliquod contradictorii exercitium, de facto et sui generis, inter partem actricem et defensorem *vinculi*; solummodo in hac facti specie non requiritur ut pars conventa resistens acta inspicere valeat, nam ipsa in casu exercitio suae facultatis renuntiavit» (*De iure defensionis...*, 257-258; vide también ID., *De tutela...*, 190-191).

1612 § 3), y ello no sólo para hacer más fácil su acatamiento, una vez que sea ejecutiva, sino también para garantizar el derecho de defensa en una eventual instancia ulterior. El c. 1614 dispone, consecuentemente, que la sentencia no tiene eficacia alguna antes de su publicación, aunque la parte dispositiva, con consentimiento del juez, ya se haya dado a conocer a las partes. No se entiende, por eso, cómo podría ser confirmada la sentencia en grado de apelación sin la debida publicación (c. 1615)⁵³.

b) El proceso canónico es de suyo secreto *para todos los demás*. Hace notar el Papa en la alocución ya varias veces citada: «Ante todo debe quedar claro que la “publicidad” del proceso canónico para las partes no afecta a su naturaleza reservada para todos los demás»⁵⁴. Juan Pablo II cita a este respecto: el c. 1455 §§ 1 y 3, sobre el secreto de oficio en el proceso judicial por parte de los jueces y de los auxiliares del tribunal, y sobre la facultad del juez de vincular con juramento de secreto a los testigos y peritos, a las partes y a sus abogados o procuradores; el c. 1475 § 2, sobre la prohibición impuesta al notario y al canciller de proporcionar copias de las actas judiciales y de los documentos del proceso sin mandato del juez; y el c. 1457 § 1, sobre la posibilidad de sancionar al personal del tribunal por la violación de la ley del secreto.

El Santo Padre indica también el motivo de ese carácter secreto: «Los fieles, en efecto, se dirigen ordinariamente al tribunal eclesiástico para resolver su problema de conciencia. En orden a eso dicen, con frecuencia, ciertas cosas que en otro caso no dirían. También los testigos testifican a menudo bajo la condición, al menos tácita, de que su declaración sirva sólo para el proceso eclesiástico. El tribunal —para el que es esencial la búsqueda de la verdad objetiva— no puede traicionar su confianza, revelando a extraños lo que debe permanecer reservado»⁵⁵. Si, por ejemplo, para resolver su problema de conciencia, las partes refieren hechos por los que podrían ser penados en el fuero civil, ¿cómo podría, en tal caso, el tribunal eclesiástico traicionar su confianza y exponerlos a

53. JUAN PABLO II, *Alloc.* 1989, n. 7.

54. *Ibid.*, n. 8.

55. *Ibid.*, n. 9. Añade F. DANEELS: «Videtur quod (...) iudex in casu particulari ad evitandum grave et vere imminens periculum illud secretum urgere valeat ut v. gr. a partibus earumve procuratoribus praevidam scriptam declarationem iuratam ad rem exigere possit, antequam eis probationes collectas inspicere permittat» (*De iure defensionis...*, 265; en la versión inglesa, 94).

sanciones civiles por haber dicho la verdad en orden a la solución justa del problema de conciencia?

Por lo demás, el problema del carácter secreto del proceso está también presente, aunque en menor medida, en las legislaciones estatales⁵⁶.

En la línea de evitar el peligro de que las actas judiciales del tribunal eclesiástico sean utilizadas para fines extraños a la causa canónica, la Signatura Apostólica ha debido recordar más de una vez que el c. 1598 § 1, comentado más arriba: *a)* permite a las partes, ciertamente, tomar conocimiento de las actas en la cancillería del tribunal, pero no permite que se les entreguen copias (lo que llevaría consigo el riesgo de su uso impropio y de la violación del secreto); *b)* que a los abogados que lo soliciten se les puede entregar copia de las actas —los abogados, en efecto, son personas de confianza (cfr. c. 1483), no sólo pueden ser obligados al secreto mediante juramento, como las partes, sino que pueden ser también sancionados o excluidos del elenco (cfr. cc. 1487 y 1489)—, pero éstos no tienen derecho a obtenerlas⁵⁷.

Este carácter secreto vale también respecto a las autoridades estatales (civiles o judiciales), a las que no puede reconocerse un derecho de obtener de los tribunales eclesiásticos las actas judiciales. Ni tampoco se entiende, en las naciones en las que rige la democracia y la separación entre la Iglesia y el Estado, cómo podría en realidad la jurisdicción eclesiástica estar sometida a la estatal⁵⁸. También de esto ha debido ocuparse

56. Hace notar F. DANEELS: «[I]n the procedural law of several nations there are provisions for trials “behind closed doors” to protect the privacy of those involved in the process. One should remind that the art. 6 of the “European Convention on Human Rights” also makes provisions for proceedings where the public is excluded: “...the press and public may be excluded from all or part of the trial... where the interest of juveniles or the protection of the private life of the parties so require...”» (*Some Remarks...*, 61).

57. Cfr. en la Signatura Apostólica, por ejemplo, prot. nn. 14.393/82 VT, carta de 29.VIII.1983; 15.229/83 CG, carta de 13.XII.1983; 20.530/88 VT, carta de 25.I.1989; 21.222/89 VT, carta de 12.IX.89; 21.667/90 VT, decreto de 16.VI.1990; 23.659/92 VT, decreto de 8.VIII.92. Cfr. también 27.827/97 VT. Puede ser interesante, en este sentido, la actitud de la Signatura Apostólica ante un recurso contencioso administrativo interpuesto por las Hnas. XY contra un decreto de la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, retirado incluso antes de que se iniciase el tratamiento de la causa. En el caso el Obispo diocesano pidió a la Signatura Apostólica una copia del recurso. La Signatura Apostólica, sin embargo, consideró que no podía facilitársela al Obispo, que no era parte en la causa (en la Signatura Apostólica, prot. n. 19.624/87 CA).

58. Cfr. también F. DANEELS, *De iure defensionis...*, 265-266 (en la versión inglesa, 94).

alguna vez la Signatura Apostólica⁵⁹, incluso respecto a las autoridades estatales italianas que pretendían obtener las actas de un tribunal eclesiástico⁶⁰.

Obviamente este secreto no es absoluto. No significa que el tribunal eclesiástico no pueda, en uso de su propia discrecionalidad, entregar, por motivos válidos, las actas o algunos actos a la parte —con el consentimiento de la otra parte y de otras personas (por ejemplo, un testigo) cuya *privacy*, que debe respetarse, pudiera ser violada; y respetando asimismo el bien público de la Iglesia— para que pueda usarlos en el fuero civil. El tribunal puede también, con las debidas cautelas, permitir a personas ajenas a la causa que inspeccionen las actas por motivos de estudio. Este secreto, además, no prohíbe que el tribunal, eliminando el riesgo de revelar lo que debe permanecer secreto, publique sus decisiones.

CONCLUSIÓN

Precisamente en el Libro VII se encuentra la afirmación de que la salvación de las almas debe ser siempre en la Iglesia la suprema ley (cfr.

59. En un caso, la Corte de Apelación de Nouméa (Nueva Caledonia) ordenó al Arzobispo de aquella ciudad, como moderador del tribunal eclesiástico, que entregara las actas de una causa de nulidad matrimonial para que pudieran ser usadas en un proceso civil de divorcio. Interpuesto recurso contra ese mandato, la Corte de Casación de Francia, con sentencia de 29.III.1989, confirmó su propia jurisprudencia respecto a la naturaleza reservada de las actas del proceso canónico, o sea, sobre el secreto de oficio de las autoridades eclesiásticas respecto a los hechos conocidos por razón del ministerio eclesiástico. Cfr. al respecto O. ECHAPPÉ, *À propos d'un arrêt récent de la Cour d'Appel de Nouméa du 28 septembre 1987*, en «L'Année Canonique» 30 (1987), 307-318; ID., *Le secret professionnel des juges et des autres membres des officialités devant la Cour de cassation*, en «L'Année Canonique» 32 (1989) 221-228; en la Signatura Apostólica prot. n. 19.612/87 VAR.

60. En la Signatura Apostólica cfr. prot. nn.: 6643/75 EC, carta de 3.II.1976; 14.393/82 VT, decreto de 2.VII.1982 y carta de 29.VIII.1983; 26.006/95 VAR; 27.979/95 VT. Quisiera añadir que, puesto que se trata evidentemente de actas redactadas en el ámbito del ejercicio del ministerio religioso, están expresamente tuteladas —por lo que se refiere a Italia— también por el secreto profesional del que se trata en el art. 200, letra a, del «Codice italiano di Procedura Penale», así como por el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Italiana, que introduce modificaciones en el Concordato Lateranense, de 18 de febrero de 1984, el cual en el art. 1 reafirma que el Estado y la Iglesia católica son, cada uno en su propio orden, independientes y soberanos; y en el art. 4, n. 4, establece: «Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del proprio ministero» (AAS 77 [1985] 521-531; 522 y 524. En ese sentido, por ejemplo, han respondido a las autoridades judiciales los Vicarios judiciales de Torino (en la Signatura Apostólica prot. n. 26.006/95 VAR) y de Perugia (en la Signatura Apostólica prot. n. 27.979/95 VT).

c. 1752). Por tanto, podría parecer extraño que no la haya mencionado entre los principios inspiradores de este Libro. Pues bien, además de que esa afirmación se refiere a todo el Código y expresa el principio fundamental de todo el derecho canónico, ha de tenerse en cuenta que ya estaba presente también cuando se imprimían en el derecho procesal canónico los principios expuestos, que deben ser interpretados a su luz, al igual que todas las normas procesales.